

La soja de la discordia. Los sentidos y estrategias en la movilización de la pequeño burguesía.

Marcelo Gomez*

«Lo que siempre fue, lo mismo será
Lo que siempre hicieron repetirán
No olvidar
Lo que ves ya se ha visto ya
Tal vez algún día lo sabrás
Todo tiene un tiempo bajo el sol
Tiempo de plantar y de cosechar
Tiempo de hablar y también de callar
Tiempo de guerra y tiempo de paz
Tiempo para el tiempo y un rato más»
Profecías Vox Dei La Biblia, 1973

Las situaciones de antagonismo colectivo e incertidumbre generan fuertes efectos «subjektivantes»: rompen la apatía y la inercia propia de la confianza ilusoria en un futuro estable, nos sacan de la despreocupación por los asuntos públicos. La tranquila neutralidad comienza a aparecer como riesgosa forzando paulatinamente a la toma de posiciones. Los temas de conversación ya no están monopolizados por la industria de la distracción relajada (Tinelli, la farándula, el fútbol, etc.) y nos vemos compelidos a clarificar nuestros propios intereses respecto de sus relaciones de complementariedad o contradicción con otros intereses. Los antagonismos colectivos obligan a pronunciarnos sobre proyectos societales, y suscitan efectos de visibilización u ocultamiento con sus correlativas maniobras de manipulación en torno a la lucha por la definición de lo que es «la realidad»¹.

De manera muy nítida, la reaparición del conflicto social de la mano de la lucha por el control del excedente derivado de la colocación de exportaciones primarias en general y de la soja en particular sirve como un decodificador de cambios en la estructura social, en el proceso económico y en las orientaciones y prácticas políticas de las clases sociales.

La movilización colectiva extendida muestra el carácter clasista del conflicto: son intervenciones multitudinarias acerca del orden social, su sentido, la distribución de costos y beneficios, ventajas y desventajas, intentos de modificar posiciones relativas en el acceso a recursos, disputas sobre el sentido de los procesos económicos, sobre el alcance que dan en concreto a ideas como justicia y equidad. Nos interesa el conflicto en tanto no se trata de conspiraciones de elites o especulaciones de políticos —que por cierto existen siempre— sino de la movilización de capas importantes de la población en torno a intereses definidos en el marco mismo de estos procesos, es decir planteamos el análisis como fenómeno que actualiza clivajes clasistas para entender lo político.

Es en este sentido de análisis clasista, que vamos a presentar algunas observaciones o comentarios acerca de la significación de la producción agropecuaria centrada en la soja para el proceso de acumulación de excedente y para el proceso de formación de nuevos actores sociales, de nuevos intereses, prácticas y estrategias políticas en las clases dominantes y las clases medias.

I- La centralidad económica y política del excedente sojero y las retenciones

A partir del activismo de los «hombres de campo» se ha reflatado la instalación de la importancia de la producción agropecuaria para nuestro país. Sin embargo, cualquier lectura del PBI según ramas y sectores muestra que el agropecuario ni siquiera alcanza al 6 % del total siendo muy superado por la industria manufacturera y hasta por los servicios (los servicios de educación, ciencia y tecnología, generan más del 7% del producto, por ej.). No se trata entonces de una importancia cuantitativa, ya que la riqueza que generan otros sectores es

mucho más importante que la agropecuaria.

Incluso debe ser desechada también la idea de que la producción agropecuaria fue la base del crecimiento económico del último quinquenio. Mirando las series de cuentas nacionales vemos que su evolución en los últimos años ha ido por debajo de otros sectores: la industria y los servicios crecieron bastante más que el sector agropecuario. No es cierto que el excedente sojero explique el crecimiento de la economía, los datos dicen que los incrementos de producción, empleo e ingresos de la población se explican mucho más por la actividad de otros sectores.

Así, cabe preguntar acerca del porqué de la magnitud que ha asumido el conflicto y del porqué de la centralidad social y política del sector agropecuario. ¿Es una pura construcción mediática o cultural o existen otros fundamentos de esa centralidad?

Una de las constantes históricas como clave de lectura de los procesos económicos en nuestra historia ha sido la de la superposición entre los bienes agroalimentarios que la argentina debe exportar para generar excedente de divisas y los «bienes salarios» que conforman la canasta básica de consumo de su fuerza de trabajo. Peor aún el excedente de divisas es necesario para sostener el proceso de industrialización y desarrollo de los servicios que son importadores netos de bienes de capital y demandantes deficitarios de divisas. Es decir, las divisas que produce el sector agroalimentario son las que abastecen y posibilitan las importaciones del resto de los sectores económicos. En este sentido, el reciente incremento de la producción, el empleo y el salario industrial obedece sin duda a un incremento de la rentabilidad media del sector obtenida por la protección de un tipo de cambio devaluado, pero al mismo tiempo depende de una abundante provisión de divisas que permite importar insumos, materias primas industriales, bienes de capital e intermedios que son necesarios para la actividad industrial.

Esta suerte de «dependencia fisiológica» estructural de la absorción de parte importante de la renta de la tierra se ve claramente cuando se recuerda que las retenciones fueron parte fundamental de la política económica de Onganía, y que la sobrevaluación del tipo de cambio impuesta por el agroganadero Martínez de Hoz, o la convertibilidad con tipo de cambio bajo e inflación en dólares de la era neoliberal en los '90, significaban también otros instrumentos nítidos de captación de esta renta². Por tanto, una primera conclusión es que lo que está en juego en este conflicto no es simplemente la apropiación fiscal «indebida» de un recurso excedentario (Estado vs. Campo) sino fundamentalmente la direccionalidad económica de esa apropiación, es decir el para qué, el destino final de esos recursos, su inscripción en un proceso de acumulación/distribución.

Tradicionalmente los ajustes devaluatorios para promover exportaciones y equilibrar balanza de pagos, suponían una fuerte baja del salario real a través de fenómenos inflacionarios

y caída del consumo interno para liberar saldos exportables. Sin embargo, la particularidad del proceso devaluatorio nacido en el 2002 es que se ha combinado con un crecimiento sin precedentes del nivel de actividad, consumo y empleo en casi todos los sectores. Ello es así porque la coyuntura de precios internacionales de muchos alimentos luego de la incorporación de China a la OMC ha significado aumentos sin precedentes de los precios, que se han vuelto insólitos luego de las turbulencias financieras del último trimestre del año pasado. En efecto, los mercados de commodities fueron inflados por los capitales que huyen de los riesgos de inversión en papeles y es así como se llega a un precio de la soja que supera la barrera de los 500 U\$ la Tn. La hiper abundancia de divisas permitió que los costos internos del tipo de cambio alto fueran amortiguados, compensados o directamente sufragados con ella. Así el déficit de balanza comercial del sector industrial manufacturero³ y de servicios no fue achicado sino todo lo contrario, dando rienda suelta al crecimiento espectacular de la economía y no tan espectacular pero sí llamativo de los salarios e ingresos de la población.

De esta forma, el boom de la soja es algo así como la tarjeta banelco que permite eternizar el ciclo expansivo de la economía. El agroalimentario es el único sector que tiene el password para acceder al excedente mundial—como antes había sido la lana, el trigo o la carne y en otros países es el petróleo— y por ello se convierte en la pieza clave de toda la arquitectura de la acumulación. No es el sector más grande, no es el que ha motorizado el crecimiento, pero sin los billetes verdes que se consiguen con la «maldita soja» el resto se empantanaría. Su importancia es exclusivamente estratégica: es la llave del tesoro, es el control del excedente de divisas, es una «Casa de la Moneda» más importante que la que emite nuestros billetes. Es por ello que la pugna con el sector que tiene acceso al excedente mundial no puede tener nada de sorprendente: todos los demás dependen en última instancia de él⁴.

Como ha explicado Bourdieu (2001) en su teoría de las estructuras sociales del campo económico: es dominante aquel que ocupa en la estructura «un lugar tal que la estructura actúa en su favor». La dependencia de la única fuente excedentaria de divisas tanto de la autoridad política estatal (sostener superávit fiscal, impedir el endeudamiento, mantener tipo de cambio protectorio competitivo, compensar costos para mantener salario real, etc.) como del resto de los sectores (acceder a maquinarias e insumos importados, sostener consumos sofisticados de clases medias en ascenso, déficits comerciales externos, etc.) es lo que funda el poder del «campo». Son los titulares de la «solvencia estratégica» del sistema a pesar de que generan escasa riqueza social.

La dependencia «política» de las divisas merece un párrafo aparte porque condiciona el comportamiento esperable o posible del comando político. En realidad el modelo kirchnerista tiene el enorme éxito de haber salido de la dependencia adictiva al financiamiento externo de la economía aprovechando la coyuntura comercial internacional extraordinariamente favorable con una valorización enorme de los términos de intercambio, pero al costo de una suerte de «endeudamiento político» con las clases detentadoras del excedente extraordinario. Las condiciones de gobernabilidad y las amenazas que la movilización popular generalizada (entre 2001 y 2003) cernía sobre las clases instaladas en los lugares estratégicos de la estructura, posibilitó la primavera de una acumulación más distributiva. Los sojeros fueron para

Kirchner hasta marzo/08 lo que el capital financiero y el remate de activos públicos fue para Menem en los '90. En cierta medida el secuestro de ahorros del 2001—no por el Estado, que dio simplemente la cara, sino por los bancos— era el cobro de una deuda económica (el ingreso de capitales líquidos) con la que se estimuló la economía en los '90. De forma semejante, la inflación, la huelga y sabatoje económico del sector agropecuario excedentario es el cobro de una deuda política contraída con los que pusieron los excedentes en divisas para posibilitar el crecimiento en el pos2002.

Si adoptáramos el punto de vista del actor en el lugar central de la acumulación, podríamos ver «la construcción K» como una inversión en el restablecimiento de las condiciones generales de gobernabilidad y gestión de la dominación y la acumulación. «Nosotros le pagamos a los vagos que los apoyan» decían unos chacareros en el piquete de Gualaguaychú criticando los multitudinarios actos oficialistas. En su percepción la «caja de K» es la que ellos le proporcionaron. En su relato ahora con tasas de desocupación reducidas y habiendo elevado el ingreso y el consumo gracias a ellos, «la construcción K» es ya una intermediación innecesaria a la que «si le sacamos la plata, se cae». La idea es que no existe en «la construcción K» ni lealtad ni ideología, que nadie los va a defender si se quedan sin caja, que el kirchnerismo es pura demagogia «solo aumento del PBI y del consumo» capitalizado de manera indebida por el kirchnerismo y sus aliados. «SS» decía Menem: «soja y suerte».

En última instancia la adhesión de las clases populares marginadas la podrían conquistar ellos u otro líder con camiseta peronista con el mismo dinero o menos, para hacer gala de eficiencia. En definitiva, el conflicto también es tributario de los éxitos del gobierno: el retorno de la hegemonía en la forma de una revalidación de los intereses de la acumulación atada a la integración al mercado mundial, solo es posible por el éxito en resolver lo suficiente los déficit de integración social y legitimidad política instalados desde el 2001. «Gracias K por los servicios prestados» parecería ser el grito de guerra no dicho.

En este punto conviene precisar acerca del sentido de las retenciones móviles.

En este momento, la renta de la tierra se basa en: 1) la fertilidad y el régimen de lluvias y ríos que en gran medida son bienes públicos; 2) la devaluación del peso que es una medida pública de gobierno forzada por las circunstancias (insolvencia generalizada y recesión catastrófica en el 2002); 3) la estampida de precios internacionales que es una contingencia que nada tiene que ver con inversión, riesgo o productividad; 4) en el desarrollo tecnológico (semillas genéticamente modificadas resistente a los herbicidas más brutales⁵ y maquinaria de siembra directa, agroquímicos fertilizantes).

Por el punto 2 las retenciones no deben considerarse propiamente como un impuesto: no se grava ni el trabajo, ni el patrimonio, ni los beneficios ni los ingresos netos generados por una actividad, sino que se retienen diferencias generadas por una medida monetaria y una política cambiaria de depreciación de la moneda. En este sentido la medida de las retenciones se inscribe dentro de una política cambiaria y monetaria y no en una política fiscal. Busca fijar un tipo de cambio efectivo para una actividad de manera de neutralizar los efectos de arrastre sobre los precios internos. La dificultad aparece con el aumento especulativo de los precios: la devaluación internacional del dólar y de muchos activos financieros hace que se inflen los precios de muchos bienes, especialmente

los primarios, haciendo insuficiente el uso de un tipo de cambio efectivo fijo y obligando a moverlo al son de los precios internacionales. Es en esto en lo que consiste la movilidad de las retenciones: ya no hay tipo de cambio efectivo fijo sino móvil para combatir la fluidez de precios internacionales. Mientras el resto de la economía disfruta de una convertibilidad protectora (el U\$\$ a 3 \$), el detentador de la renta sojera debe someterse a una flexibilidad cambiaria que tiene techos mucho más bajos (1,60 \$ por U\$\$ aprox.) Si en los '90 el tipo de cambio fijo garantizaba el ingreso de capitales que financiaba la expansión de demanda y consumo, a partir del 2002 es la fijación -primero semifija y luego móvil- del precio que garantiza el ingreso de divisas (el de la soja) el que constituye una condición de posibilidad de la expansión de la demanda y el consumo. En la etapa expansiva de los '90 se contrarrestó la reaparición de la pugna distributiva por la combinación tipo de cambio fijo y bajo e ingreso irrestricto de capitales financieros, luego de la crisis se evitó la misma pugna mediante la combinación tipo de cambio exportador bajo con «expropiación» vía retenciones (tipo de cambio diferencial) del excedente de divisas.

Sin embargo, no hay que confundirse, las retenciones no son en sí una política de redistribución activa sino pasiva: busca que el ingreso no se concentre en el sector exportador por la apropiación de las ventajas de la devaluación⁶. No hay mejora en la distribución del ingreso solo compensa o anula los efectos de una política que por sí misma castiga el salario real (la devaluación). Sin perjuicio que el gobierno estimuló la mejora del salario real aumentando el salario por decreto 4 veces entre 2003 y 2005, propiciando negociaciones colectivas al alza, subiendo espectacularmente el salario mínimo y las jubilaciones mínimas, multiplicando jubilaciones y planes sociales, todo lo cual aumentó de manera significativa el ingreso disponible de las clases populares.

En definitiva las retenciones móviles son una política antidistorsiva obvia si se piensa en el equilibrio del conjunto del sistema económico productivo. Además la relación entre retenciones/precios internos/salario real no ha sido puesta en duda por nadie, ni siquiera por los economistas más ortodoxos.

II- La sojización no es solo del campo

Sin embargo esta importancia estratégica de ser la fuente y los detentadores del superávit de divisas en un momento que la Argentina carece de financiadores (salvo las compras «bolivarianas» de bonos) se refleja en algo que pocos han reparado —excepción hecha de Maristella Svampa y Jorge Rullin: el nivel de integración de intereses multisectoriales en torno y detrás del «paquete sojero».

- a) El dispositivo productivo: monopolio de la semilla transgénica y sus cuantiosas patentes, el pesticida glifosato también cuasi monopolístico, la fabricación de maquinaria para siembra directa, los famosos pooles de siembra y grandes arrendadores, el resto de proveedores que dinamizan las economías urbanas del interior.
- b) El dispositivo de transporte y comercialización: acopiadoras —muchos productores también son acopiadores—, puertos privados, transporte terrestre, las cerealeras exportadoras.
- c) El dispositivo financiero: fondos de inversión que financian operaciones de los pooles de siembra y grandes arrendadores. El papel de los bancos no debe despreciarse: en

un periodo de inestabilidad financiera mundial y crisis bancaria latente, los excedentes líquidos de la exportación de materias primas son fondos muy codiciados.

- d) El dispositivo industrial: aún muchos industriales pequeños y medianos, ni hablar los grandes, invierten en tierras o en los pooles de siembra y muchos grandes empresarios del campo tienen intereses diversificados en industrias agroalimentarias y servicios conexos.
- e) El dispositivo político: muchísimos políticos y hasta algunos sindicalistas son propietarios arrendadores y arrendatarios (Reutemann, Moyano, los más conocidos), otros megaempresarios sojeros han devenido políticos oficialistas (Urquía) sin olvidar la izquierda: Bussi de la CTA y De Angelis de la CCC también son propietarios, en el último caso dicen que arrendador y sojero. El kirchnerista sindicato de peones rurales (UATRE) demuestra su carácter estrictamente propatrimonial y también la naturaleza de las relaciones sociales en un mundo agrario donde se utiliza muy poca fuerza de trabajo manual permanente.
- f) El dispositivo burocrático estatal: desde la corrupción de empleados aduaneros en los puertos privados hasta los favoritismos en el manejo de compensaciones, devolución de impuestos, declaraciones antedatadas de exportaciones, y la insólita tramoya del código aduanero de Menem que —con evidente vista gorda política— permite a las cerealeras que liquidan al estado las retenciones a los productores quedarse con una parte, etc.

La corporización espectacular de un proceso en un actor social tan particular (el productor rural) con capacidad de intervención sobre el orden político no puede engañarnos sobre el carácter extendido de la sojización. No es sólo el campo el sojizado, no sólo el campo vive de la soja.

Es decir, el complejo sojero no es ni «el campo» —una idílica comunidad de trabajadores de la tierra— ni una «oligarquía» —un selecto grupo de terratenientes—, no es ni el oficialismo ni la oposición, ni los aparatos del estado que defienden un interés público ni ingenuos productores privados que defienden su trabajo, sino una trama muy extensa de intereses articulados, aunque al parecer todos mucho más rentistas que productivos. El proceso de valorización mundial de commodities alimentarias ha colocado a la renta de la tierra como la palanca de tracción de la acumulación de capital en nuestro país y múltiples sectores definen o redefinen sus intereses y sus posicionamientos políticos en torno a este fenómeno. No se trata de los 2 mil millones de diferencia por la movilidad de las retenciones este año, sino se trata de incrementos de precios esperados a nivel mundial que no tienen techo a la vista.

III- La pequeño burguesía agraria al asalto

Como hemos señalado los superexcedentes no tienen ningún origen en los riesgos o esfuerzos empresariales, ni en la excelencia del trabajo concreto sino en externalidades favorables de mercado y naturales, o en desarrollos tecnológicos por el que algunos monopolios mundiales sacan suculentas tajadas del excedente. El papel del empresariado rural autóctono es nulo en este proceso, carece por completo de mérito y no puede sino calificarse de rentismo directo (alquilan sus campos a las empresas de siembra) o indirecto (compran el paquete de siembra directa para sus campos o arrendan campos de propietarios pequeños que no pueden explotarlos por sí).

La idea extendida en ciertos sectores del «progresismo popular» de una pequeña y mediana burguesía agraria que fue marginada del «proyecto nacional y popular» por un gobierno torpe que la soslayó para negociar con los «grandes» es hasta cierto punto tan absurda como todas aquellas del marxismo vulgar que intentan imputar «verdaderos» intereses a fuerzas sociales.

Esta interpretación es teóricamente falsa aún aceptando la tesis de la «atribución» racional de intereses: esta pequeña y mediana burguesía está hoy racional y objetivamente en las antípodas de una acumulación centrada en el mercado interno, es socia natural del negocio agroexportador y a través de este conflicto que la tiene como abanderada, pugna por su entrada como actor principal con poder de decisión en el «lugar central» de la estructura de dominación económica.

Cualquier proyecto nacional-popular de características mercado internistas y distributivo sería, desde su punto de vista racional, «confiscatorio» en las actuales condiciones.

También es una interpretación empíricamente falsa. Cualquiera que haya pasado por Tres Arroyos, Carlos Casares, Lincoln o Rufino sabe del «derroche» y la picaresca de una clase en ascenso: los hombres en los bares con sus celulares a full manejando negocios, inversiones, preguntando cotizaciones de casi cualquier cosa para invertir los excedentes, tramando maniobras para evadir impuestos, hablando discretamente con las mujeres que ahora pueden «mantener», planificando su próximo viaje de placer, su próxima compra, etc.

Pero esta picaresca complaciente se convirtió a partir de las retenciones móviles en estos últimos meses en un proceso de movilización de fuerte politización y militancia de estos sectores –incluyendo una notable participación de jóvenes– que favorecidos por el tiempo libre que les proporciona el hecho de alquilar sus campos o las escasísimas dificultades que tiene el cultivo de la soja al que manejan prácticamente con un handy, se concentran en los bares y restaurantes o clubes de los pueblos a hacer ambiciosos proyectos económicos y políticos, y a meter presión sobre la dirigencia política tradicional y el resto de los sectores de las ciudades del interior para traccionarlos en esta verdadera «cruzada patriótica». El Goliat de la acumulación agroexportadora bajo la bandera de la soja está formando su propio ejército de base rural.

Por ello hay que superar de una buena vez el esquematismo vulgar de medir «intereses objetivos» y pensar el «campo del pueblo» como una torpe agregación de los débiles frente a los fuertes. Muchas veces desde el punto de vista estratégico, los débiles tienen muchos más motivos racionales para unirse a los fuertes. En este caso particular de la disputa por la renta extraordinaria, no existen conflictos de intereses entre grandes y chicos, sino entre ellos y otros sectores de la fuerza de trabajo de la industria y los servicios a los que no pueden controlar ni económica ni políticamente, y cuyo niveles de actividad dependen del acceso a las divisas que provienen de estas rentas.

Los argumentos de los ruralistas han atacado más las cadenas de «intermediación», los «mercados concentradores» con sus especuladores, es decir a otros segmentos de la pequeña burguesía comercial urbana que a los grandes grupos sojeros o los terratenientes. Las menciones a la «concentración» de la tierra son nebulosas. No hace falta aclarar la obvia contradicción entre el reclamo por bajar retenciones y el reclamo por desconcentrar la propiedad de la tierra. La suba de retenciones baja el precio de la tierra siendo quizás el antídoto más efectivo contra la concentración de la tierra⁷.

Una de las pruebas de que el paquete sojero no favorece especialmente la concentración de la propiedad de la tierra es que el Censo Agropecuario de 2002 muestra que en las zonas pamapeanas sojeras la estructura de propiedad de la tierra permanece estable, justamente debido a que la inversión de los pooles es en soja y no en activos; les conviene alquilar más que comprar la tierra.

En este sentido es suficientemente ilustrativo, el hecho de que el reclamo de los «chacareros» en la ruta no sea el de denunciar los abusos de las exportadoras (Cargill, Dreyfus, Nidera, etc.) y los pooles (Gorobocopatel) que «arreglan» directamente con los funcionarios del gobierno la manera de evitar los costos de las medidas (fraudes en las declaraciones de embarques, declaraciones antedatadas, etc.), sino lisa y llanamente que se sienten «expropiados», confiscados, «que es dictatorial», «que toca su dignidad», etc.

Como relataba un chacarero invitado al almuerzo con M. Legrand «yo nunca había participado antes pero... cuando me metieron la mano... ahí fue instintivo, reaccioné... me tocaron la dignidad».

Es cierto que la FAA fue una convidada de piedra en el manejo político del negocio sojero entre el gobierno y los grandes pooles y exportadores que se anoticiaron de la resolución 125 antes e hicieron las previsiones del caso. Hasta ahora los «chacareros» de la FAA eran beneficiarios residuales, de segunda y es lógico que quieran pasar a primera. Sus reivindicaciones pasan por tener carta de ciudadanía con voz y voto en ese negocio que parece haber llegado para quedarse por algún tiempo en el mercado mundial. Su militancia en las rutas es su carta de ingreso al comando de la política agropecuaria hasta ese momento manejada entre los grandes y el poder político. Por supuesto, no es para modificar el comando en un sentido progresivo sino para hacerlo más regresivo de manera tal que cumpla con sus expectativas sin colisionar con los grandes intereses ya instalados. Esta militancia agraria de «la gente como uno» ha contribuido a que el papel de los grandes intereses en juego quede semioculto: las acopiadoras/exportadoras/comercializadoras no practican la política pública lo que les permite jugar a varias bandas y sacar ventajas de todos. El hecho de que los pequeños y medianos rentistas agrarios hayan definido su interés por la lucha contra las retenciones y el Estado y no contra los abusos y maniobras de las grandes es lo que cimienta su unidad pero también la naturaleza de sus preferencias en materia de políticas agropecuarias y modelo de acumulación.

Y esta pugna por la plena ciudadanía económica en el club de los decisores del negocio sojero por parte de la clase media agroexportadora se formula muy claramente como a expensas del gobierno kirchnerista y su tímido patrón redistributivo. Es decir, el acceso de la clase media agraria al club de decisores sobre los agroexcedentes se hace a costa de involucrarlos en una cruzada contra el peso gubernamental en esas decisiones y contra las presiones redistributivas que emergen de parte del sistema político y las organizaciones populares.

Su alianza sólida con los grupos poderosos agropecuarios y su silencio acerca de los abusos de las cerealeras y los pooles⁸ se acompaña de la hipocresía sin límite de invocar a Evo Morales y a las luchas de las Ligas Agrarias, pero todo ello no quita en nada su componente regresivo⁹. Su lucha consiste en convalidar y legitimar que la renta originada en los precios internacionales y la devaluación no va a quedar sujeta a las condiciones de estabilidad monetaria y de precios del conjunto. El resto de los sectores deberán asumir a través de la inflación la convali-

dación de sus expectativas de apropiación de la renta extraordinaria.

El materialismo vulgar de creer que D'Angelis y Buzzi deberían estar de acuerdo con la distribución del ingreso por rentas extraordinarias de su sector no puede ser aceptado, salvo por una concesión al discurso «políticamente correcto» de establecer la ceguera acerca de la formación de intereses y para evitar la disonancia cognitiva que produce la imagen de un «noble gringo labrador» cortando rutas y abastecimientos para salvaguardar rentas extraordinarias.

En este momento, la FAA no defiende a los productores de pequeña propiedad, en las tierras marginales, sin capital ni maquinarias, que practican una agricultura de subsistencia o baja acumulación. Según denuncias del MOCASE y el MOCAFOR, la FAA operó activamente en Santiago del Estero y Formosa para extender la frontera sojera despojando de sus tierras a las comunidades campesinas indígenas incluso utilizando prácticas como el amedrentamiento armado, el envenenamiento de pozos, la destrucción de herramientas de labranza, la intimidación, la persecución policial, el incendio, arruinando los cultivos no sojeros con el glifosato, etc. sin que el gobierno tomara ninguna medida. Lejos están de defender a los campesinos pobres, ellos defienden una actividad de acumulación sobre la base de la plena apropiación de la renta de la tierra.

La poderosa fuerza de tracción de la expectativa de participar en este excedente gigantesco -si se prolonga en el tiempo el cambio de precios relativos en el mercado mundial- es lo que nuclea a los medianos y pequeños productores con los grandes. Y lo que motoriza el apoyo de otros sectores urbanos de clase media que aspiran a jugar un papel de servidores privilegiados de ese proceso de apropiación del excedente.

III- Las clases medias entre el discreto encanto de la soja y la «amenaza» del gobierno redistributivo

La gran pregunta de porqué ha pasado a la movilización opositora una parte importante de los sectores medios urbanos tiene muchas aristas. Por un lado, estos sectores han sido beneficiarios del crecimiento económico, han protagonizado un boom de consumo y aprovechado el mejoramiento de empleo e ingresos, se han favorecido de diversas políticas del gobierno como los subsidios al transporte, el combustible y la energía, y comulgan con las políticas de derechos humanos. No se trata entonces de explicar el cacerolazo de Barrio Norte hediondamente golpista y antipopular, sino el de Caballito que ya se anunciaba por el voto a Macri y a Carrió el año pasado.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores urbanos descontentos y movilizados no participa de manera directa en la renta agraria e incluso que la política de retenciones móviles es claramente un instrumento de protección de los ingresos reales de la población y de la estabilidad de precios, queda la cuestión porqué pueden estos sectores «equivocarse» tanto y «escupir para arriba». Lejos de plantearnos un saber sobre sus «intereses objetivos» acá debemos visualizar el proceso de cálculo y formación de intereses desde el punto de vista histórico estructural y desde el punto de vista coyuntural.

Las hipótesis que se manejan en torno a esto pecan de generalidad. La tradicional caracterización jauretchiana de volubilidad y volatilidad de la «media clase» y su traumática

relación con el peronismo ha sido común en la historia del pensamiento social argentino (Altamirano, 1997) sin embargo la intensidad de la movilidad social que es persistente en la argentina (Jorrat, 2000, 2005) muestra que las clases intermedias están sometidas a fuertes procesos de ascenso y descenso de forma tal que podría decirse que «nunca son las mismas». Mucho más si tenemos en cuenta las reformas estructurales acaecidas en los años '90.

La hipótesis «oficial» de manipulación mediática sobre sectores «influciables» a través de la imagen puede tener algún viso de realidad en la medida en que está bien establecido que estos sectores son los que están más expuestos a los formadores de opinión pública. Los segmentos ABC 1 y 2 constituyen las teleaudiencias del periodismo político. Pero debemos aclarar que los ratings de estos programas son bajísimos. Los medios quizás sean más eficaces para generar «climas» difusos más que para asegurar o definir opiniones o preferencias ante esos climas. En general debe aceptarse la hipótesis que la eficacia de los medios aumenta en la medida en que potencia significaciones que ya circulan de manera extendida o cuando logra montarse sobre hechos conmocionantes. Es claro que los actores también producen hechos especulando con la repercusión en los medios y que sin el concurso de los mismos, su «carácter conmocionante» se perdería en gran medida, pero también es claro que los medios no pueden «crear» una realidad sino en el mejor de los casos sesgar o si se quiere distorsionar su lectura. La monotonía monopólica mediática hace que este trabajo de «recorte» sesgado facilite enormemente este proceso de creación de «climas difusos» y de circulación de claves de lectura.

Otra hipótesis más sociológica es la persistencia de demandas ético-políticas y de modos de acción colectiva generados con las crisis del 2001/2002. El cacerolazo y los cuestionamientos específicamente políticos contra el gobierno (estilos autoritarios, falta de apego a la ley, clientelismo, menoscabo al federalismo, etc.) muestran esta continuidad. Sin embargo, si en aquella coyuntura los cuestionamientos a la «clase política» excedían por completo a un gobierno, y tampoco se asociaban al apoyo a otros sectores o reconocían una conducción o liderazgos, ahora la movilización tiene un destinatario bien definido: la presidenta, y organizaciones y dirigentes reconocidos y aclamados: los ruralistas, D'Angelis, etc. que impulsan un reclamo típicamente económico-corporativo.

Así, conviene intentar examinar algunas hipótesis tentativas acerca del proceso de formación de intereses de los sectores pequeño burgueses en esta coyuntura.

Para las clases medias propietarias con módicas capacidades de ahorro o acumulación, la alternativa de asociarse a las promesas de un reingreso al primer mundo de la mano agroexportadora no es nueva y ni siquiera es una «falsa» percepción. De hecho para la sociología clásica y la historia académica argentina (Germani, 1950 y 1955, Graciarena, Sergio Bagú, 1950) las capas medias tienen su origen como auxiliares y beneficiarias secundarias del modelo agroexportador de fines del siglo pasado. Una de las características morfológicas de nuestras pequeñas burguesías es que tienen un alto componente comercial y de administración y servicios públicos y privados, y un bajo componente industrial y técnico comparada con las estructuras de clase de los capitalismo avanzados. Jorrat (2000) ha señalado estas diferencias —menor tamaño de la clase de servicios al sector privado y mayor tamaño de la pequeña burguesía comercial autónoma— con datos comparativos entre grandes centros urbanos de países europeos, y el

conglomerado urbano del GBA.

Nuestras clases medias están en buena medida al margen de los procesos de industrialización. El hecho de tener clases medias mayoritariamente localizadas en los sectores terciarios de la economía las hace indiferentes a los procesos de industrialización y desarrollo productivo. La formación y autopercepción de sus intereses se vincula más con la performance monetaria-cambiaria y en las posibilidades de participación en la circulación del excedente cuya fuente fundamental suele ser la renta proveniente del comercio exterior.

Hace muchos años R. Prebisch (1980), subrayó algo sobre los sectores medios que en su momento lamentablemente nadie o muy pocos prestaron atención: lejos de ver a las llamadas clases medias como el motor del desarrollo las veía como un obstáculo poco menos que insalvable. El consumo imitativo del «primer mundo» como factor de estímulo a la demanda llegaba pronto al cuello de botella en el que para financiarlo se necesitan bajas tasas de ahorro interno y alta dependencia del ahorro externo. El desarrollo inspirado en alcanzar el estándar de vida del primer mundo distorsiona los procesos productivos, impide la maduración tecnológica como fuente apropiada para aumentar la productividad, produce todo tipo de despilfarros y desahorros, y sobre todo fuerza un tipo de inversión productiva distorsiva en la medida en que condena al abaratamiento de la fuerza de trabajo y el desempleo a grandes mayorías por ende fuera del universo de consumo. Dentro del sainete de las últimas décadas esto se ve caricaturizado en la «plata dulce», el «deme 2» en Miami, el mercedes benz que no paga patente ni seguro, pero también en el consumo récord de celulares y de modelos de autos de alta gama y de construcción urbana de lujo, o de aparente lujo, en desmedro de modelos de automóviles populares, del mejoramiento del transporte público y de la vivienda popular. Las clases medias «consumistas» tienden a orientarse por el imaginario de ingresar solas al primer mundo bajo la coartada ideológica del «mérito» generalmente sustentado en el capital cultural y educativo y a veces en el origen étnico europeo inmigratorio.

La hegemonía ideológica del «modelo imitativo de desarrollo» tiene en las clases medias urbanas ansiosas por el ascenso social a sus apoyos más importantes a pesar de las penosas consecuencias de subalternizar la maduración e incluso restringir los desarrollos industriales productivos. Los obreros y trabajadores manuales construyen autos, autopistas y casas a los que jamás tendrán acceso y el sistema funciona de tal manera que no hay inversión ni interesados en producir en los que sí podrían tener acceso. El sistema funciona de tal forma que este patrón de consumo conveniente sobre todo para las empresas transnacionales subordina el patrón de acumulación y distribución: se produce y distribuye en función de este patrón de consumo que evoluciona según los ritmos del primer mundo y no sobre la base de una difusión virtuosa de los incrementos de productividad del sistema. La consecuencia no puede ser otra que la exclusión social. Además, señala Prebisch, el patrón de consumo imitativo de la clase media suele ser bendecido políticamente y termina contaminando fuertemente las expectativas de los sectores populares lo que es fuente de mayor conflictividad social y al mismo tiempo reproduce las mismas causas estructurales que los generan. En este esquema de formación de intereses «prosperidad» quiere decir expectativas de consumo imitativo aprovechando las «oportunidades» del mercado mundial. Los incrementos espontáneos de productividad no pueden ser fuente de

excedentes suficientes para alcanzar el consumo imitativo, mucho menos si quieren ser redistribuidos de manera equitativa. Así, tradicionalmente la inserción en el mercado mundial aparece como una condición necesaria para conservar este patrón. En este esquema la «prosperidad» nunca puede ser extendida a todos los sectores, dejando fuera de la «prosperidad» a las clases populares sin acceso a la renta agroexportadora.

En la actual coyuntura la «soja» es algo así como el salvoconducto para acceder a los recursos que requiere este patrón de consumo imitativo. En la coyuntura actual los sectores medios son estructuralmente predispuestos y permeables al atractivo canto de sirena agroexportador, convalidado por el ridículo discurso de la «oportunidad histórica» que es un lugar común de gobierno y campo. En este mismo punto es que el discurso de la distribución del ingreso y de aumento del empleo vía ahorro interno e inversión (o sea retenciones y menor consumo de las clases que acumulan), y de los salarios reales (o sea retenciones y subsidios para bajar precios de alimentos y combustibles) se convierte en una amenaza para este modelo.

Así, la «oportunidad histórica» es susceptible de lecturas «clasistas» y significados concretos diferentes.

Ya un viejo historiador Cortés Conde proponía modificar la dieta de las clases populares para que la demanda interna no compitiera con la externa y por tanto maximizar la acumulación para dedicarla a la modernización y acortar las distancias que nos separaban de los países avanzados. Faustino Fano ex presidente de la Sociedad Rural con un estilo más brutal dejaba de plantear el tema como una cuestión de «gastronomía» y lo convertía sádicamente en «demográfico»: abogaba por una argentina que no tuviese más de 14 millones de habitantes porque la proporción exacta de excedente que podía producir la plena explotación del potencial ganadero de nuestro país alcanzaba para darle solo a esa cantidad de gente un estándar de vida semejante al del primer mundo. La idea de que la preservación de un modo de vida es la base de la política económica es uno de los grandes éxitos hegemónicos que han tenido nuestras clases dominantes arrojando por resultado un consenso cultural típico de la clase media sobre la «modernización» y el «bienestar» del que ni el populismo más industrialista es ajeno.

En la coyuntura actual, el patrón de consumo imitativo generalmente como ha ocurrido en otras fases de nuestra historia fuerza soluciones de «atajos» cortoplacistas para los que la «soja» viene como anillo al dedo detrás de la idea de «la oportunidad histórica».

Para estos sectores medios, el tema de la redistribución, la exclusión y la pobreza quedan de lado al superarse las amenazas derivadas de la desintegración social, y ahora hay que retomar la agenda de los '90: gobernar para esas expectativas de bienestar emulado y para ese horizonte de vida de primer mundo. La redistribución aparece como un obstáculo para aprovechar esta «oportunidad».

Otra característica propia de la presente etapa política, es que desde el fracaso del gobierno aliancista y los procesos de extinción del radicalismo y la división de la derecha, los sectores medios quedan sin puntos de referencia políticos. En cierto sentido, sufren un proceso de descapitalización política: carecen de representación y patrocinio de sus intereses en la política gubernamental en particular y en el sistema político en general. Asimismo, las fracciones de la pequeño burguesía que se beneficiaron del auge económico como el pequeño y

mediano comerciante, los cuadros técnicos y administrativos de la gran empresa privada, varios segmentos de los asalariados de servicios, finanzas, comunicación y algunas otras ramas con altos niveles de actividad, atraviesan un periodo de bienestar económico con la consabida explosión de expectativas centradas en la propiedad inmueble, el turismo y el consumo de bienes durables de alta gama, al mismo tiempo que persiste su falta de capital político.

La combinación de «descapitalización política» –este gobierno no ofrece por estilo y aliados confianza política a estos sectores- con capitalización económica y explosión de expectativas, es una fuente de descontento que el conflicto con el campo contribuye a potenciar y canalizar. La demanda de un gobierno que gobierne para esas expectativas y la realidad de un gobierno que a duras penas puede con la inflación produce una gran frustración que la exacerbación del discurso redistributivo y la movilización en su apoyo de las clases populares tiende a agravar. La inflación de expectativas crecientes y la ilusión de un estándar de vida de primer mundo se da de patadas con los carteles de precios de la lechuga en la verdulería del súper y nos recuerda que deberemos redoblar nuestro esfuerzo para comprar la cartera que nos gusta, o no nos va a alcanzar para la cuota del auto, el plasma, el viaje, etc. Bourdieu (2001) ha mostrado esta existencia desgraciada de la pequeña burguesía siempre en tensa relación de esperanza y frustración en relación con las oportunidades que le ofrece el campo económico. Siempre con sueños de realización individual que exceden sus capacidades, con proyectos que no pueden sostenerse, viéndose a sí mismos como personajes centrales capaces de controlar su destino, participando de un sistema cultural de creación de necesidades y expectativas para la cual la insatisfacción permanente es una necesidad económica, una industria. Para ellos, la «redistribución» con su implícito componente de «limitación» de expectativas, renunciadas, o posibles sacrificios a favor de «otros», puede convertirse en una mala palabra.

Por eso mismo había caído tan mal el discurso de Cristina¹⁰¹⁰ Sobresale el rechazo ofuscado y epidérmico de las mujeres de estos sectores de clase media por la figura de Cristina. Algunas encuestadoras de opinión pública (G. Romer) han medido un serio rechazo en estos sectores femeninos que podrían –por pertenencia de clase- identificarse con la figura y el estilo de Cristina. El rechazo surge porque no ven los estilos «de clase media» que ellas consideran «femeninos» empezando por «ser peronista», no recurrir a la «sensibilidad femenina», no apelar a «la seducción», ni a la «comprensión», etc. Así, la solvencia intelectual como recurso y el uso directo y enérgico de la autoridad hacen divisar en estos sectores la sombra de Eva Perón, por supuesto de nuevo subordinada a un hombre

(Néstor).

No se trataría estrictamente de «machismo» sino de un contenido clasista que se le da a la reivindicación de «lo femenino» y su referencia a «los piquetes de la abundancia» que desato el primer cacerolazo. Esta referencia equivalía a sancionar políticamente la prioridad de la redistribución y la equidad y deslegitimar las expectativas de prosperidad de estos sectores. «Qué tiene de malo tener 4X4 ... si quiere distribución que distribuya lo de ella» decía una adolescente cacerolera en Callao y Santa Fe.

Todo esto se puede sintetizar en un reclamo de un concurrente en el cacerolazo del 16/06 que luego fue citado por Néstor Kirchner en su conferencia de prensa: «¡Los blancos también somos argentinos Sra. De Kirchner!, ¡también tiene que gobernar para nosotros!». En consonancia con estos esquemas de percepción, todo el conflicto con el campo puede ser leído como una pugna para cambiar el sesgo de clase de la autoridad política y las orientaciones de las decisiones gubernamentales: «Queremos nuestra prosperidad» parecen decir estos sectores autoinvertidos de un papel central en el desarrollo modernizador del país (el papel de «clases laboriosas y progresistas» simbolizados en los «chacareros») que los envalentona para reclamar sus «derechos de propiedad» sobre los frutos de este desarrollo.

La percepción del «contenido» de clase del gobierno para estos sectores da lugar a una paradoja muy curiosa. Como puede verse en el siguiente cuadro con datos de una encuesta domiciliaria, se produce una inversión en la percepción de a qué clases o sectores benefició o perjudicó la acción del gobierno de Néstor Kirchner: las clases medias altas y altas ven a este gobierno como perjudicando menos y beneficiando más a las clases bajas que lo que lo ven las mismas clases populares y las clases medias. Las clases medias altas y altas lejanas al kirchnerismo perciben más ventajas y menos desventajas para las clases populares que las propias clases bajas más cercanas al gobierno. En menor medida lo mismo pasa en las clases medias bajas y en la pequeño burguesía: se ven menos niveles de perjuicio percibido a las clases populares que los que perciben las mismas clases populares. Simétricamente las clases populares ven que el gobierno beneficia mucho más y perjudica mucho menos a las clases altas que lo que las clases altas ven.

Mientras apenas un 10,7 % de los encuestados pertenecientes a clases populares ven beneficios del gobierno para estas clases, un 21,7% de las clases altas ven al gobierno beneficiando a las clases populares. Algo grosaramente podría decirse que el gobierno es más populista para las clases medias y altas que lo que es para las clases populares.

Percepción de sectores más beneficiados y más perjudicados por el gobierno según clase social (ocupacional)

Pregunta de respuestas múltiples (hasta 3 sectores beneficiados y 3 perjudicados)

Clase de Pertenencia Del Encuestado*	Sectores percibidos como beneficiados o perjudicados									
	Clases Altas		Pequeña Burguesía		Clase Media Baja		Clases Populares		Otros Sectores	
	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados	Beneficiados	Perjudicados
Clases Populares	45,5	2,7	5,9	9,6	16,4	15,9	10,7	57,8	21,5	14,0
Clase Media Baja	29,4	2,5	7,5	21,3	20,6	17,6	10,2	42,6	32,3	16,0
Pequeño Burguesía	28,4	4,0	7,3	26,1	25,8	18,7	6,2	34,5	32,3	16,7
Clases Medias Altas y Alta	31,2	4,5	6,4	20,1	12,1	27,9	21,7	31,5	28,6	16,0
Total	33,2	3,0	7,0	19,5	20,1	18,3	10,3	43,4	29,4	15,8

Fuente: Encuesta de Predisposición al cambio social y la acción colectiva. Muestra aleatoria estratificada de 600 casos en Capital y Partidos del GBA- Noviembre/07. Error de estimación +- 4,5% Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada- UNTREF.

Nota: porcentajes sobre respuestas.

* **Clases Populares** incluye trabajadores manuales en relación de dependencia, operarios calificados o no calificados, servicio doméstico, peones, changarines, desocupados, vendedores ambulantes.

Clase Media Baja incluye trabajadores no manuales rutinarios en relación de dependencia, empleados administrativos, de ventas o servicios de calificación operativa o menor sin personal a cargo, cuentapropistas de oficios de servicios no profesionales o comerciantes sin personas a cargo.

Pequeño Burguesía: incluye empleados jerárquicos administrativos, comercio o servicios de calificación técnica (incluye docentes) en relación de dependencia con hasta 40 personas a cargo, profesionales universitarios independientes sin personas a cargo, y cuentapropistas del comercio o los servicios de oficios no profesionales con hasta 5 personas a cargo.

Clase Media Alta y Alta: incluye directivos, jerárquicos y gerentes o dueños, profesionales universitarios independientes con personal a cargo, comerciantes y cuentapropistas de oficios no profesionales con más de 5 personas a cargo, empleados jerárquicos no profesionales con más de 40 personas a cargo o profesionales con más de 5 personas a cargo.

Otros incluye grupos e instituciones como sindicatos, movimientos sociales, Iglesia, Jueces, periodistas, etc.

En este tipo de mediciones de opinión hay que descontar el efecto típico de miopía por el cual la propia clase de pertenencia siempre puede ser la más perjudicada y la menos beneficiada, por tanto siempre es más interesante ver la percepción que tienen de otros sectores respecto al gobierno más que de sí mismos.

Otro aspecto interesante es la nítida división que se da en la evaluación por parte de ambas fracciones de la clase media (baja y pequeña burguesía) según la cual la clase media baja es más beneficiada que perjudicada por el gobierno, mientras que ocurre exactamente lo contrario con la pequeña burguesía. La pequeña burguesía tiene niveles de perjuicio percibido por el conjunto de las capas medias mayores que los percibidos para la clase media baja. Lo mismo ocurre con los beneficios: las clases medias bajas se ven como mucho más favorecidas que la pequeña burguesía.

En el análisis desagregado de subgrupos populares y de los sectores medios (ya sin representatividad estadística) percibidos como beneficiados, se destacan primero los jubilados, luego los docentes, y más lejos los desocupados, y los pobres. Sobresale la absoluta ausencia de beneficiados a los empleados públicos y su confinamiento a la categoría de perjudicados. Es interesante que las clases medias y altas notaran entre los subgrupos de clases altas más perjudicados por el gobierno a los productores agropecuarios. Las empresas extranjeras aparecen con una notable presencia en las percepciones de todas las clases respecto al gobierno como mucho más beneficiadas que perjudicadas.

Veamos cómo puede plantearse la transposición política de este esquema de definición de intereses en términos de «nada de distribución, prosperidad para el que se la merece», y sus pretensiones de validez y generalización visibles en el discurso de los movilizados tras el campo y en el de sus dirigentes.

En principio hay un interesante intento de reapropiación de la categoría de «pueblo». La supuesta derecha ya no habla de «gente» o «ciudadanos» sino que inició una notable intencionalidad de reenmarcar la palabra fundante de todos los procesos de cambio de los últimos 70 años. Entre los cacerolesos las exhortaciones a que la presidenta abandone a «los D'Elías», a

que gobierne «para todos», y la diferenciación que hacían no solo los medios sino también los manifestantes entre «gente» autoconvocada y «micros» llevados por el gobierno tiene una larga historia en la argentina que Carrió se encargó de actualizar la noche del 30 de octubre pasado cuando después de reconocer la derrota electoral diferenció a los ciudadanos de la oposición que votan con conciencia y los pobres que tienen que votar al gobierno por un plan social o un bolsón de alimentos. Hasta le llegó a asignar a la civilidad «republicana» de clase media un papel pedagógico de cara al futuro: dar lecciones cívicas de ciudadanía y «enseñar a los pobres a votar». Así, la idea es que no hay que confrontar o reemplazar la noción de pueblo sino «republicanizarlo», depurándolo de las usurpaciones populistas-setentistas-clientelistas, e introducirle una jerarquía: la clase media es la rectora civil en torno a la cual deben aglutinarse los «pobres».

En el acto de Rosario del pasado 25/05 se dio también tanto entre los dirigentes como entre los concurrentes una insistente prédica acerca de que ellos son el verdadero «pueblo argentino». «¿Cómo va a ser pueblo D'Elía?» se preguntaba alguno. La ilusión que se convierte en imperativo de que el pueblo es el pueblo de clase media y que el pueblo de clase media aspira a progresar y convertirse en clase alta sin los vicios de la clase alta («sin olvidarse de los pobres»), y que únicamente un pueblo como este puede construir una argentina grande, son parte de este discurso que claramente reclama un gobierno que incluya las reivindicaciones y perspectivas de estas clases en sus políticas.

Frases como «nosotros también somos argentinos» se repitieron en las coberturas noticiosas sesgadas; «¡Nosotros somos los argentinos que valemos la pena Sra. Presidenta!» exclamaba una mujer. Otro inquiría «¿Qué es distribuir el ingreso?... sacarle a los que trabajan y quieren progresar para darle a unos vagos, a unos parásitos que viven del gobierno... ¿eso es?», y cosas por el estilo muestran esta faceta de percepción de los propios intereses que pone en contradicción la equidad social -vía redistribución a través de políticas estatales- y el desarrollo entendido como «prosperidad de los que se lo merecen».

IV- No solo nuevos actores y discursos sino nuevas estrategias

El capitalismo democrático cifra la política entre la necesidad de consenso y la necesidad de inversión: la huelga de inversores es una forma directa de forzar al poder político a través de la amenaza sobre las condiciones de base de la producción del consenso. El capitalismo agrario (sojofinanciero) argentino ha dado un paso más y pretende resquebrajar el consenso a través de una huelga patronal de suministro de alimentos. Los que controlan el estratégico excedente de divisas abandonan la cooperación y obediencia con la autoridad política y realizan una suerte de resistencia civil que impacta de manera inmediata sobre el orden público amenazando con una situación de ingobernabilidad. El nivel de antagonismo y desinstitucionalización del conflicto, las características de la luchas, la respuesta política estatal y las estrategias políticas y de opinión pública del bloque agropecuario merecen más que una reflexión porque incluyen elementos sumamente novedosos.

Polarización

El nivel de antagonismo y polarización puesto en juego, los discursos de satanización de las contrapartes y el nivel de pirotecnia y agresividad en la retórica hacía muchos años que

no se veían al punto de exhumar un lenguaje político de épocas que se creían superadas (gorila, oligarquía, montonerismo, etc.). Asimismo, las medidas de lucha a las que apela el bloque agropecuario: el corte de rutas internacionales, la generalización de piquetes espontáneos, es decir sin control, y posteriormente las medidas para generar desabastecimiento en grandes ciudades y algunas actividades económicas, colocaron no solo al conjunto del sistema político sino a toda la vida cotidiana de las ciudades dentro del conflicto. Aquí la apuesta a la polarización de facto que hicieron los ruralistas tuvo un gran resultado: obligó a grandes sectores de la población a sentirse afectada y tomar posición, además de dar un cauce a los descontentos con el gobierno por otros motivos. El binarismo del discurso irreductible y ofuscado de ambas partes redujo de entrada los espacios para apoyar las retenciones sin apoyar al gobierno o apoyar los planteos del «campo» sin apoyar la aberración de los cortes de ruta y el desabastecimiento premeditado. El binarismo puro y brutal se fue corporizando en los movimientos de los cuerpos en la calle a favor y en contra (la contramovilización de organizaciones sociales del FPV a la Plaza de Mayo; el contrapiquete de los camioneros en la ruta 14).

La «contra acción colectiva» protagonizada por los movimientos sociales de base popular aliados al gobierno —demostrando unos reflejos del que el mismo staff oficial de funcionarios parecía carecer— impidió que la ilusión de rechazo unánime al gobierno que transmitían las pantallas de TV generara una situación de mayor precariedad política. La espontaneidad inmanejable de las clases medias y altas descontentas con un discurso antigubernamental virulento contrastaba con la tibieza de estructuras partidarias, sindicales y aliados tradicionales. Solo los movimientos sociales populares parecían preparados para dar respuesta al desafío planteado desde las clases medias insurrectas.

La primera consecuencia de la polarización inicial es que el conflicto comenzó a exceder el reclamo específico y la defensa de una medida de gobierno y comenzó a estructurar intereses en torno al «modelo» de país, la política económica, los estilos políticos y hasta el funcionamiento de las instituciones. Los ruralistas, lejos de amilanarse orientaron resueltamente su estrategia en esa dirección: terminar haciendo del conflicto una suerte de plebiscito sobre la orientación general del gobierno, sobre la dirección del mismo tanto en materia económica como política, justamente porque la pretensión de validez de un reclamo sectorial tan limitado dificultaba «quedarse» en una demanda corporativa de difícil aceptación para otros sectores. Si se quería aspirar a luchar con posibilidades por esta reivindicación era necesario sustentar su pretensión de «generalización» en su articulación a otras demandas e impugnaciones al gobierno.

Detrás del reclamo por las retenciones se desata una lógica típica de la guerra según lo planteara magníficamente Foucault (2000) o, si no se quiere usar un lenguaje tan categórico, del «combate abierto»: si la lucha comienza por el intento de imponer una verdad invocando la razón del «derecho» y la «justicia», en el transcurso de la guerra es la lucha misma la que se va convirtiendo en la fuente del derecho y la justicia: la voluntad de perseverar en la lucha, la persistencia, la masividad de los apoyos, las vacilaciones de los adversarios, sus divisiones, el coraje de las fuerzas propias y las miserias y genuflexiones de las del enemigo, etc. son la muestra de la «verdad», y se convierten en la fuente sustantiva de la legitimación.

Llegado a este punto fracasan todos los argumentos de los bienpensantes: no hay forma de justificar técnica y valorativamente de manera universal-racional ningún reclamo. La lógica de los argumentos y contraargumentos una vez desatada la lógica beligerante destruye muy rápidamente la apelación ético-discursiva para conquistar la voluntad, y en el plano de los debates todos y ninguno tienen razón. Solo los signos concretos del combate comienzan a convertirse en verdaderos argumentos que inciden sobre la voluntad. La pretensión de imponer por la lucha una verdad basada en una razón universal que debería ser aceptada, termina invirtiéndose: lo que funda la verdad de los guerreros es la pretensión de imposición y la capacidad de llevarla a cabo. La victoria de la verdad queda desnuda y la guerra la obliga a vestirse como la verdad de la victoria.

Este es exactamente el punto en el que las mediaciones institucionales no pueden actuar o se vuelven ineficientes para procesar y mediar intereses de manera «racional» y suelen quedar sujetas a una lógica de imposición, se convierten en meros momentos tácticos, subsumidos en el enfrentamiento. No hay una lucha por la legitimidad de cierto orden social, sino la legitimación que puede dar la lucha. No se trata habermasianamente de decidir colectivamente qué intereses son los más importantes o pueden fundar racionalmente sus «pretensiones de generalización» si los de los asalariados, la industria, los pobres y excluidos, los que menos tienen, o los que ostentan el derecho de propiedad asociado a la acumulación y el progreso económico. Una vez desatada la guerra se trata de qué y cómo la lucha misma impone la generalización de esos intereses, de cómo el resultado de la lucha fundamenta las pretensiones. Por tanto, el binarismo puro y brutal que como vimos en la realidad no existe —los intereses de los grupos concretos están mucho más mezclados—, es un requisito propio de la dinámica de la guerra. Incluso el tipo de reivindicaciones del bloque agropecuario (la renta retenida) encuentra múltiples dificultades a la hora de enmarcarla en registros discursivos disponibles que le den legitimidad. Solo la fingida imagen del «pobre sacrificado chacarero» y su peligro de extinción repetida hasta el hartazgo por los medios podía operar como legitimador de intereses. Así es que al «campo» rápidamente le convenía también la «lógica de la guerra» y no la de la negociación pacífica: una lógica totalizante en donde la demanda de rentabilidad pasara desapercibida subsumida en «los horrores autoritarios y soberbios del gobierno» que les permitiera conquistar más apoyos sociales.

La lógica equivalencial beligerante propuesta por el campo, a saber: el campo es el interés general del pueblo, la prosperidad, la república, el federalismo, etc. y el gobierno es el interés particular de la clase política parasitaria, «de Moyano y D'Elía», en realidad destruye la posibilidad de una universalidad que contenga la oposición, dejando a las partes en la necesidad de demostrar su universalidad en la lucha que dirime las razones. De alguna forma los movimientos sociales oficialistas, en cierta forma «vanguardias» de las clases populares organizadas territorialmente, son los primeros en entender la lógica del combate político que se desataba. D'Elía es el primero en ponerle palabras a la binarización beligerante que se plantea, metaforizándola en el color de la piel (los morochos vs. la señora de Barrio Norte) y en la disputa por la ocupación del lugar de enunciación política central de la argentina: la Plaza de Mayo.

Visto desde los movilizados, la binarización se reformulaba en continuidad con los universos discursivos de diciembre del

2001: la «gente» versus «los políticos» pero que ahora asume con «el campo» versus «los políticos K» un contenido y una fuerza económica —de la que carecía en el 2001— y un enemigo mucho más nítido: no es el que se vayan todos, sino el que se vaya Cristina y lo que representa (Néstor, D'Elía, Moyano, los Fernández, etc.). Por si fuera poco encuentra también un estilo: la fortaleza, determinación de los «chacareros humildes» versus la «soberbia autoritaria de los Kirchner».

La polarización tensa el marco maestro¹¹ de inteligibilidad política designado como «democracia» bajo el cual podrían procesarse y compatibilizarse los intereses de todos. Estos forzamientos de nuestra democracia hasta sus mismos bordes no son nuevos y las clases dominantes los han provocado en diversas coyunturas de nuestro país: el agiotismo, mercado negro y desabastecimiento en 1974/75 contra las políticas de salarios altos y control de precios, el golpe financiero del verano de 1989, y el golpe financiero de diciembre/2001 al que siguió un contragolpe de movilización popular a partir del 19/12/01. Lo novedoso reside en que estos «golpes» se escudaban en el anonimato «del mercado». Eran golpes desestabilizadores pero que carecían de «pretensiones públicas de legitimidad» como tal vez algunos golpes militares sí las habían tenido. Buscaban simplemente desgastar gobiernos sin costos de exposición y por tanto rehuían de la polarización y el «ascenso a los extremos». En el 2001 no se pudo evitar una reacción popular incluso liderada por las mismas clases medias. Pero en este caso el intento de «golpe de mercado» con el recurso al sabotaje de abastecimiento de alimentos se acompaña de un conato o amague de desobediencia civil y por tanto lo convierte en una suerte de «golpe cívico-económico». El ex presidente Kirchner erra en centrar la fuerza de la intentona en los medios masivos de comunicación (los caracterizó como «los fierros» del nuevo golpismo), en realidad la fuerza coercitiva es bien directa y nada simbólica: la inflación, el desabastecimiento, el caos económico. Y por si fuera poco hay que agregarle una fuerza política: suman gente a las expresiones de disconformidad. Los medios simplemente pueden participar en la lucha por darle un sentido determinado a las consecuencias del uso de esa fuerza económica y política pero no la pueden sustituir.

La politización de la economía, la conversión de los mercados en «armas», en recursos «extorsivos», utilizados en un combate político constituye la especificidad de la coyuntura. El gobierno no pudo encontrar al momento armas para contrarrestar este recurso: no puede reprimir, no puede controlar cantidades y precios en mercados, no puede presionar con medidas económicas de castigo, no puede influir en los mass media¹². Por tanto, la respuesta se ha limitado a una en el plano cívico político que si bien se puede calificar de exitosa no parece ser suficiente.

Estrategias

La estrategia del «campo» ha sido del manual de los movimientos sociales: la acción colectiva no institucionalizada y tomando repertorios de lucha con altos niveles de disrupción y desafío que históricamente habían sido legitimados por las clases populares y hasta el gobierno mismo: los cortes de ruta¹³. La amenaza directa a la paz social, la amenaza hobbesiana de la guerra generalizada entre iguales, la ingobernabilidad y la incertidumbre sobre el principio de autoridad y orden público, la desobediencia civil que amenaza generalizarse con bocinazos y cacerolazos, etc. constituyeron de entrada los recursos para jaquear la «impermeabilidad» política

de la que venía haciendo gala el gobierno desde hacía ya varios años.

El conflicto estalla en el preciso punto del cenit del armado político kirchnerista: acuerdo con Lavagna, con el sindicalismo, con los gobernadores, pleno control del aparato del PJ, sin oposición política sólida a la vista, etc. Confiado en sus fuerzas la iniciativa del gobierno se centró al principio en sostener su invulnerabilidad. El culto a la autonomía decisional y la negativa a contraer obligaciones públicas con sectores sociales se puso en juego inmediatamente. Sin embargo, este conflicto sirvió para poner en evidencia que un armado para monopolizar decisiones de gobierno y ganar elecciones es muy distinto a un armado para impulsar y defender un proyecto económico y social. Además en momentos que el kirchnerismo estaba a punto de formalizar la institucionalización definitiva de su marco maestro político a través del acuerdo del bicentenario, la concertación plural, etc., con un libreto ya remanido, el desafío del sector agropecuario muestra las limitaciones y, en cierta forma, la liviandad de la agenda kirchnerista presa de una inercialidad emanada de su propio éxito, de la pérdida de ambiciones transformadoras y de la escasez de ideas.

La binarización que planteaba inicialmente el gobierno seguramente daba por descontado un rápido desgaste de la protesta y un triunfo final claro en la mesa de negociaciones. Es decir apostó a que el bloque agropecuario no se iba a «bancar» el antagonismo. Pero el binarismo polarizador quedó convalidado sorpresivamente por el cacerolazo y la estrategia agresiva de desabastecimiento y amenaza de caos dejó al gobierno sin su receta conocida. No solo no se desgastaba sino que el antagonismo incrementaba los apoyos y la determinación de los sectores descontentos.

Ante la persistencia redoblada del desafío agro-cacerolero la estrategia del gobierno comienza a modificarse: lejos de apelar al decisionismo y la contrapresión retaliativa (persecución judicial, impositiva, administrativa, contrapiquetes, etc.) que muchos temían y algunos auspiciaban, optó por pedir tregua, ganar tiempo en una mesa de negociaciones, y como ingenuo «golpe de efecto» intentar «cerrar» la situación con una catarata absurda de concesiones¹⁴ unilaterales a los «pequeños y medianos» intentando deslegitimar las conducciones de las entidades con la secreta aspiración de que los pequeños y medianos favorecidos presionarían para desactivar la protesta. Por supuesto que en una situación normal la masiva devolución de retenciones según tamaño hubiese destrabado el conflicto y dividido al bloque ruralista, pero en una lógica de combate lo único que hizo fue revelar que el gobierno se debilitaba y no soportaba la presión.

El siguiente paso del gobierno fue dar la batalla en la opinión pública, intentar deslegitimar la protesta por los daños que causa, es decir, «la leche derramada», «la violencia y abusos en los cortes»¹⁵, e intentó escudarse detrás de la «sociedad»: intentó mimetizarse con doña Rosa que no encuentra harina en el super y la lechuga a 10\$, apostando ya no al desgaste de los ruralistas sino al desgaste de la opinión pública. Esperando que la reducción del consenso por la multiplicación de costos sociales de la medida ahogara la vitalidad de los descontentos. Esperar capitalizar a favor los costos colectivos que generan los contendientes es un grosero error que en su momento intentó hacer el gobierno de la alianza con los primeros cortes de ruta que sufrió. El gobierno está justamente para impedir esos costos, no es una parte más de la sociedad. La pasividad y esperar el error no pueden ser

estrategias aptas para un gobierno. Una estrategia discursiva que tiende a aceptar la propia victimización del gobierno para «aparecer» mimetizado con la sociedad agredida es un recurso algo infantil que tiene el oneroso costo de transferir el total de los costos de la confrontación a las clases populares. La autovictimización poniéndose detrás y no delante de la «sociedad» buscando un dictamen de la «opinión pública» en una concepción dramática de la política, simplifica ingenuamente las relaciones de fuerzas. Solo los movimientos sociales populares tuvieron reflejos y «actitud» para enfrentar la situación sobre la base de la acción antagónica pero por supuesto deben sufrir la satanización y el aislamiento, cuando son la única fuerza real capaz de generar resistencia efectiva a los avances rento-golpistas. Además el mismo planteo inicial polarizador agresivo del gobierno había restado espacio para que surja una «sociedad civil» inocente víctima entre dos abusadores. La lógica de la guerra impidió que esto se produjese y obligó a un enrolamiento forzoso.

Los ruralistas fueron extremadamente hábiles y temerosos de que la estrategia gubernamental fuera exitosa, alivianaron las medidas de lucha utilizando criterios selectivos de bloqueo de ruta para permitir el flujo de mercaderías. Se cuidaron de aparecer como «desabastecedores» y apostaron a mostrar su «legitimidad» y «patriótica inocencia» en el acto en Rosario en el día de la Patria.

El registro de la mayoría de los discursos fue claramente beligerante prosiguiendo el proceso de deslegitimación sustantiva del gobierno: «Los K son obstáculos para el desarrollo» «Formas autoritarias, inconstitucionales, antidemocráticas», «soberbia», «personalismos», «incompetencia técnica», etc. recorrieron las argumentaciones retóricas y declaraciones posteriores. El gobierno nuevamente calcula que el acto fue el pico de la movilización a la que sigue una fase descendente e intenta volver a la polarización politizando el conflicto ante la opinión pública, declarando el acto de Rosario como de oposición política, negándoles la instancia de negociación sectorial que había prometido.

La respuesta a la «guerra de nervios» que proponía el gobierno no se hizo esperar demasiado impulsada ya no tanto por las dirigencias sino por los productores en las rutas. El paro agropecuario volvió a generar desabastecimiento ahora con el concurso de empresarios y dueños de camiones y autoconvocados de toda especie. El espesamiento de la situación y el riesgo de generalización del descontento, desgajamiento de apoyos políticos y sindicales, obligó a un nuevo cambio de táctica saliendo de la pasividad y entrando en un frenético activismo de presiones y señales para ablandar a las cuatro entidades con la promesa de diálogos, también logró desactivar a las organizaciones de transportistas y hacer anuncios de liberación de rutas y de preparación de la penalización judicial del corte de ruta que fue brillantemente aprovechada por D'Angelis y los monopolios de la comunicación como detonante de un nuevo cacerolazo de escala nacional. Es evidente que todos los trucos de tahúres de los Fernández pueden ser efectivos para un conflicto convencional que corre por los carriles del «juego de poder» entre política, corporaciones, estado¹⁶, etc. pero torpe y absurdo en una situación de conflicto no convencional donde para colmo el mismo discurso de los derechos humanos les ata las manos y hasta es resignificado cínicamente por los «golpistas» con un discurso «contra la represión». De nuevo fueron los movimientos sociales populares reclamándole al gobierno espacios de acción para garantizar abastecimientos, controlar precios, y denunciar

un golpe derechista antipopular de nuevo tipo, los que parecían hacerse cargo de la lógica beligerante que requiere la situación.

Cacerolazos

El claro y contundente discurso de Cristina del 24 de marzo deslegitimaba con una argumentación impecable y clara («dos piquetes de la abundancia») la demanda de los ruralistas desde los marcos maestros de legitimación socialmente instalados desde el 2001: inclusión social, equidad, integración, distribución del ingreso, etc. Pero la salida al cacerolazo de esa misma noche mostraba que para muchos sectores no se trata de un problema de legitimación de demandas sino de ilegitimidad de ese marco maestro y de la posición «popular» de enunciación política. La agudización del conflicto con el apoyo de sectores medios y altos urbanos puso a las claras que no se trata de validar pretensiones de legitimidad de demandas sectoriales sino de modificar los criterios vigentes de validación y esto siempre es una situación de «guerra»: no existe más allá del enfrentamiento mismo ningún tribunal reconocido por ambas partes en donde validar las pretensiones propias. No se reconoce una racionalidad, no se concede la universalidad al marco maestro de validación de discursos políticos y por tanto el problema de la legitimidad queda abierto y sujeto a la lucha. La imposición será el fundamento del nuevo marco maestro de validaciones políticas.

El gobierno ha interpretado esto como «golpe» y es efectivamente así: los lugares de validación y enunciación política del kirchnerismo forjados desde el 2001 son desestabilizados y la legitimidad que se le reconoce es solamente formal: «ganó las elecciones hace 6 meses», pero no sustantiva: «el pueblo somos nosotros y estamos hartos, queremos otra cosa» que se puede describir como «clima destituyente». Pero lo que se pretende destituir no es tanto un gobierno sino algo más profundo: un código de validación de pretensiones políticas. La delegación del tema al Congreso está reconociendo por primera vez una relativización institucional de la validez del marco maestro vigente hasta ahora. El debate en el Congreso deberá poner en discusión más abierta o encubiertamente este marco. La agenda y los modelos de legitimación discursivas pueden cambiar a partir del lunes 23 de junio cuando el sistema político conjunto trate las retenciones. Ya anda el ex kirchnerista F. Solá hablando de una tarjeta de «garantía alimentaria» para comprar 40 productos subsidiados por el Estado y poder liberar así la acumulación de los agroexportadores: nadie puede haber expresado más claro lo que se pretende ¡Adios a la equidad como bandera política!. Solá llega a declarar en un programa periodístico que «el gobierno perdió el debate cultural sobre la distribución del ingreso».

La mención de los Kirchner como obstáculo al desarrollo es exactamente la perifrasis de que la distribución es un obstáculo al desarrollo. La impugnación del marco maestro del pos2001 por el momento solo puede llevarse a cabo por medio de circunloquios. La «puesta a prueba» del armado kirchnerista es al mismo tiempo un intento de soliviantar el pilar discursivo de la distribución y la integración social.

Pero ojo: no se trata tanto de una reaparición del discurso neoliberal. El mercado o la propiedad privada han estado ajenos a las justificaciones explícitas de las movilizaciones y protestas. Se trata claramente de justificar la primacía de los intereses de un sector como «motor de prosperidad» que obliga a replantear el tipo de desarrollo y el papel de las clases

en la distribución. La clase media comienza a consolidar un discurso en el que afirma sentirse amenazada no por un desarrollo basado en la centralidad de la renta agropecuaria privada que con la inflación convalida en los precios internos la ganancia extraordinaria de los productores exportadores sino por un gobierno que «expropia» a los que trabajan y producen para distribuir entre las clases parasitarias que lo votan. Existe una idea de desarrollo para los sectores medios que colisiona con el código político asumido y votado desde el 2003: ahora hay que privilegiar la prosperidad más que la equidad. Hay que privilegiar a las fuerzas sociales dinámicas que acceden al mercado mundial, para alcanzar la prosperidad de «quienes la merecen». Esta es su lectura políticamente imperativa de la «oportunidad histórica» de los precios internacionales de materias primas.

v- Perspectivas

La intervención del Congreso –que ya había tratado el mismo tema en marzo– significa que la pelea política por el consenso de la sociedad civil, es ahora internalizada por las instituciones políticas. La ambición republicana de sacarlo del escenario de las calles y llevarlo a la sociedad política, tuvo un primer efecto de «meter la calle» en la política institucional: la proliferación de carpas y las accidentadas audiencias de las comisiones lo muestran.

Los desgajamientos y la erosión que soporta el heterogéneo conglomerado oficialista sin ninguna duda van a ser aprovechados al máximo por el «golpe» y no podría extrañar que pronto empiece a tener aliados muy próximos al kirchnerismo con su previsible secuela de acusaciones de «traición».

La internalización del conflicto al institucionalizarlo en el poder legislativo legitima dentro del mismo oficialismo el debate sobre el modelo, abriendo el cauce para una incursión de la coalición agroexportadora dentro del mismo esquema K. Por supuesto, el pragmatismo que siempre han tenido las clases dominantes y su vocación por la impunidad que da una política vicaria y desde las sombras –cosa que siempre ha conspirado para la formación de una derecha democrática– los llevará seguramente a buscar en las pujas internas del peronismo una estrategia de poder. En este punto no puede pasar desapercibida la reunión de Duhalde con las dirigencias agropecuarias en marzo.

Hay quienes afirman que en las mismas zonas agropecuarias o en las ciudades del interior rural tampoco son unánimes las

posiciones de los productores y la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno no ha podido generar «contramovilización» significativa fuera de la zona metropolitana. La no concurrencia de Cristina al acto del Día de la Bandera a Rosario puede ser una señal de imposibilidad de garantizar un mínimo nivel de convocatoria a su favor.

De por sí la ofensiva agrorentista ha bloqueado por largo tiempo la política estatal en materia agropecuaria. Es probable que la soja ya no ponga los recursos para la desojización en la forma de subsidios a otras producciones. La agenda de la «confiscación» se ha impuesto por el momento a la de la «soberanía alimentaria». Sin embargo, es un tema importantísimo que la cuestión de la soja y sus excedentes, y la redistribución del ingreso se hayan abierto al debate público. Este sí puede calificarse como un logro importante cuyas consecuencias exceden el corto plazo. El conflicto en este punto produce una suerte de efecto cognitivo de «transparentamiento» de la estructura social para todos los actores y es sobre este transparentamiento que se monta el debate y los proyectos políticos.

El discurso de Cristina y el gobierno invocando la democracia, la voluntad popular, el «interés general», y ya más lacrimógenamente la pobreza y «los que más necesitan» reafirma la base popular de su proyecto pero al costo de realzar la ausencia de respuesta y de capacidad de interpelación de los sectores medios. Al excluir discursivamente de la redistribución de la renta extraordinaria a los sectores medios –cuando en la realidad este gobierno ha hecho esfuerzos fiscales notables subsidiando consumos de estas clases– se deja el espacio para convalidar las presunciones de que las clases medias no tienen nada que ganar con la mentada redistribución, e incluso que lo que se va a redistribuir es lo de ellas y que el gobierno arregla con los grandes y le pasa todo el fardo a los que «se rompen el lomo laburando y logran juntar algo». En este sentido, el discurso de Cristina que puede interpelar a los sectores medios desde lo cultural, los derechos humanos, y la democracia, parece quedar inhibido a la hora de la promesa de beneficios más tangibles. En este sentido, si para las clases populares se profesa una intervención estatal redistributiva, para las clases medias no aparece más que una vuelta vulgar a la idea del «derrame» espontáneo del crecimiento. Quizás el gobierno intente detener la pérdida de espacio simbólico y de adhesión entre estos sectores con iniciativas adicionales en el plano distributivo.

Notas

* Centro de Estudios e Investigaciones Universidad Nacional de Quilmes y Facultad de Ciencias Sociales UBA.

¹ En este sentido, una derivación del conflicto ha sido el contrapunto entre los monopolios comunicativos y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en torno a las coberturas noticiosas de las movilizaciones populares. Los aparatos mediáticos y los intelectuales (continuado con la interesante iniciativa llamada Carta Abierta) comenzaron una disputa por la producción de sentido en torno a la «realidad de nuestro país».

² Según estudios de Nicolás Arceo, Javier Rodríguez y J. Iñigo Carrera del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) las magnitudes de estas transferencias del pasado han sido mayores que las que significan las retenciones con tipo de cambio alto del presente. Esto evidencia que la resistencia empresarial a las retenciones no es a la transferencia de ingresos o a la presión impositiva por sí misma. Lo que se cuestiona es quién y cómo van a ser manejados esos excedentes. Ceder excedente para alimentar otros circuitos de acumulación donde también tienen participación las clases dominantes no parece ser problema. El problema parece ser que el actual gobierno no les garantiza esta participación.

³ La industria manufacturera en su conjunto ha tenido en 2007 casi 7000 millones de U\$\$ de déficit en su balance de divisas. Pero si excluimos las ubramas alimentarias que tienen fuertes superávits, el déficit pasa a ser de casi 15 mil millones de U\$\$ (FIDE, 2007, según datos del INDEC).

⁴ Es por ello que este excedente debería convertirse en un bien público y no en un bien privado. Existen fundamentos semejantes para nacionalizarlo a los que invocaron Chávez y Evo por el petróleo y el gas.

⁵ Ya ha sido señalado por muchos que el costo oculto de la combinación desarrollo tecnológico y rentabilidad extraordinaria es la «descapitalización» de la tierra por pérdida de minerales y extenuación de la fertilidad.

⁶ La inflación y el escándalo del INDEC previos al estallido del conflicto reduce la credibilidad de los argumentos gubernamentales: hay inflación sin retenciones móviles y el gobierno intenta tomar por idiota a la opinión pública manipulando las cifras. En este punto no parece haber diferencias de metodología desinformativa entre el gobierno y los monopolios comunicacionales salvo porque la torpeza de uno es aprovechada para fundamentar la propia torpeza del otro.

⁷ El 70% de las explotaciones de menos de 100 ha se dedican a la soja. Los pequeños son los más sojizados y en donde el alquiler de la tierra está más extendido.

⁸ Es gráfico el hecho de que no son los dirigentes o sus entidades sino políticos de centro izquierda o intelectuales (Lozano, Mario Cafiero y Llorens, etc.) los que sacan a relucir los fraudes y abusos de los grandes, que nunca son contra los chicos sino básicamente contra el erario público.

⁹ Las contradicciones entre el discurso de la dirigencia agropecuaria de origen izquierdista y los intereses que representa son palmarias: en una asamblea Buzzi era ovacionado cuando reivindicaba a los compañeros presos y desaparecidos de las luchas de las ligas agrarias y los cronistas recogían opiniones de los asambleístas que acusaban a Cristina de «setentista y revanchista». En una requisitoria periodística mientras Buzzi se esforzaba de encuadrar su conflicto desde la defensa de Evo Morales, un productor asambleísta instaba entusiasmado a «hacer como en Bolivia... los Santacruceños»!!!.

¹¹ Utilizamos este concepto clásico de «framing» (Goffman, 1974) luego adaptado para utilizarlo en la teoría de los movimientos sociales (Rivas, 1999; Mac Adam, Mac Carthy y Zald, 1999; Snow, 1992).

¹² En este sentido es francamente desalentador que el Canal 7 bajo control del gobierno no haya tenido ni siquiera una línea editorial -más allá de sus columnistas- para cubrir las protestas. En vez de una cobertura con criterio propio de los cacerolazos, el canal decidió pasar documentales de dinosaurios y torneos de voley.

¹³ El uso de repertorios de acción colectiva tan agresivos y la alta legitimidad alcanzada para los mismos puede ser retomado en un futuro no tan lejano por las clases populares: qué pasaría si aparecieran de nuevo situaciones de insuficiencia aguda de ingresos o lisa y llanamente desabastecimiento por insuficiencia de oferta o carestías de alimentos que tradicionalmente han generado revueltas en A. Latina.

¹⁴ Además está decir que las famosas y jugosas «compensaciones» a pequeños y medianos se contradicen completamente con la aspiración de detener el proceso de sojización.

¹⁵ En este punto el gobierno fue completamente distraído. El fallecimiento de un infartado en una ambulancia demorada en un piquete y el episodio dramático de agresiones a una pareja con la mujer parturienta insólitamente no fue aprovechado «mediáticamente» por el gobierno, enviando a un ministro al velatorio del muerto, identificando individualmente y promoviendo causas penales contra los agresores y responsables, etc. A nivel de los medios no hubo una política beligerante. La cobertura del mismo canal 7 optó increíblemente por la estrategia de la «atenuación» y no por una estrategia mediática de confrontación de imágenes y temas noticiosos.

¹⁶ La incapacidad de reprimir (es clara la desconfianza en las fuerzas represivas que tiene el propio gobierno) y también los fraudes en los puertos privados, en las aduanas y el ennegrecimiento escandaloso de los mercados de cereales y carnes muestra la completa inutilidad de los aparatos y burocracias estatales. La lucha por «el control de los procesos concretos» como acertadamente señalan los situacionistas, parece sustraerse a las capacidades del estado y las instituciones. Las fuerzas que se juegan en torno al poder sobre los procesos concretos tienen un origen y una naturaleza muy diferente a las formalidades institucionales y los elencos estatales: son los poderes de las clases sobre la política más que los poderes de la política sobre las clases.

Bibliografía

- Altamirano, C. (1997): «La pequeña burguesía, una clase en el purgatorio», en *Prismas* Revista de Historia Intelectual, Buenos Aires, UNQ.
- Bagú, S. (1950): «La clase media en la Argentina», en Theo Crevenna (comp.) *La clase media en la Argentina y Uruguay*, Ed. Oficina de Ciencias Sociales, Unión Panamericana, Washington.
- Basualdo, Eduardo (2001): *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, UNQ-FLACSO, IDEP.
- Bourdieu, Pierre (2001): *Las estructuras sociales de la economía*, Manantial, Buenos Aires.
- Foucault, Michel (2000): *Defender la sociedad*, Buenos Aires, FCE.
- Germani, G. (1955): *Estructura Social de la Argentina*, Raigal, Buenos Aires.
- (1950): «La clase media en la Argentina con especial referencia a los sectores urbanos» en Theo Crevenna (comp.) *La clase media en la Argentina y Uruguay*, Ed. Oficina de Ciencias Sociales, Unión Panamericana, Washington.
- Giddens, A (1981): *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*, Alianza, Madrid.
- Goffman, Erwin (1974): *Frame analysis: on essays on the organization of the experience*, N. York, Harper Colophon.
- Goldthorpe, J. (1995): «Sobre la clase de servicio. Su formación y su futuro» en Caravana y De Francisco, *Teorías Contemporáneas de las clases sociales*, Ed. Pablo Iglesias, Madrid.
- Gómez, M. (2000): *El mercado de trabajo para los egresados universitarios*, Ed. UNTREF, Buenos Aires.
- Gómez, M. (1997) «Los claroscuros del modelo neoliberal en la argentina. Explorando algunas tendencias novedosas del mercado laboral durante el Plan de Convertibilidad», *La Problemática del Empleo en la Argentina*- Informe de Coyuntura del Centro de Estudios Bonaerenses, N° 69/Septiembre/97, p.155 a 176.
- (2000): «La exclusión generosa. Ingresos y empleo en los estratos medios durante el Plan de Convertibilidad» en *Democracia, Estado y Desigualdad*, Claudio Lozano (comp.), Eudeba, 2000.
- Heyman, D. y Kosacoff, B. (2002): «La Argentina de los 90. Desempeño económico en un contexto de reformas», Buenos Aires, EUDEBA/CEPAL.
- Jorrot, Raúl (2000): *Estratificación social y movilidad. Un estudio del Area Metropolitana de Buenos Aires*, Ed. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.
- Jorrot, Raúl (2005): «Aspectos descriptivos de la movilidad intergeneracional de clase en argentina 2003-2004» en Laboratorio-Revista de Estudios sobre Cambio Social N°18, Buenos Aires, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Kessler, G. y Espinoza, (2003): «Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso Buenos Aires» en Serie *Políticas Sociales* N° 66, Ed. CEPAL/ECLAC, Santiago de Chile.
- McAdam, D., McCarthy, D. y Zald, M. (eds) (1999): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, ISTMO, Madrid.
- Murmis, M. y Feldman, S. (1992): «Posibilidades y fracasos de las clases medias según Germani», en *Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social de la Argentina*, Paidós, Buenos Aires.
- Peralta Ramos, Mónica (2006): *La política económica argentina: poderes y clases sociales 1930-2006*, Ed. FCE, Buenos Aires.
- Lee, D. y Turner, B. (comp.) (1996): *Conflicts about Class*, Longman, New York.
- Lipset, M. Et al. (1996): «Are social class dying?» en Lee y Turner, op. cit.
- Poulantzas, N. (1985): *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, Siglo XXI, México.
- Poulantzas, N (1987): *Las clases sociales en el capitalismo contemporáneo*, Siglo XXI, México.
- Prebisch, Raúl (1981): *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, FCE, México.
- Portes, A. y Hoffman, K. (2003): «La estructura de clases en A. Latina: composición y cambios durante la era neoliberal» en *Rev. Desarrollo Económico*, vol. 43, N°171.
- Przeworski, Adam (1988): «El proceso de formación de clase» en *Capitalismo y Socialdemocracia*, Ed. Alianza Universidad, Madrid.
- Savage y ot. (1995): *Property, Bureaucracy and Culture. Middle class formation in contemporary Britain*, Ed. Routledge, London and New York.
- Svampa, M. (2001): *Los que ganaron*, Ed. Biblos, Buenos Aires.
- (2005): *La sociedad excluyente*, Ed. Tecnos, Buenos Aires.
- Svampa, M. y Gonzalez Bombal, I. (2000): *Movilidad social ascendente y descendente en las clases medias argentinas: un estudio comparativo*, Instituto de Ciencias, UNGS.
- Tarrow, Sydney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid.
- Torrado, S. (1992): *Estructura Social Argentina*, Ed. De la Flor, Buenos Aires.
- (2007): «Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad» en S. Torrado (comp.), *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una historia social del Siglo XX*, T.1, Ed. EDEHASA, Buenos Aires.
- Wright, Eric (1995): «Reflexionando una vez más sobre el concepto de estructura de clases» en Julio Caravaña y Andrés de Francisco (comp.): *Teorías contemporáneas de las clases sociales*, Ed. Pablo Iglesias, Madrid